



Justificación técnico – económica para el anteproyecto de presupuesto 2025

PRESENTACIÓN

Este documento contiene la justificación técnico-económica del anteproyecto de presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la vigencia fiscal 2025, de conformidad con las directrices definidas para su elaboración por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El Anteproyecto de presupuesto de la JEP para la vigencia fiscal 2025 es el resultado de un ejercicio articulado de planeación, liderado por la Secretaría Ejecutiva con las dependencias e instancias que conforman la Jurisdicción para su presentación ante el Órgano de Gobierno, al cual le corresponde su aprobación de conformidad con el parágrafo 2º del artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2017, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, así como el numeral 5 del artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En este documento se consideran la totalidad de las necesidades identificadas por la Jurisdicción para el 2025, que tanto en el presupuesto de funcionamiento como de inversión superan el tope indicado por el MHCP. En todo caso, para cumplir el registro del Anteproyecto en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), la Jurisdicción también proyectó el escenario de presupuesto ajustado al tope, a partir del total de necesidades identificadas.

A partir de 2023, el presupuesto de la JEP ha empezado un proceso de reconfiguración reflejo del avance institucional luego de 6 años en operación. Es así como, por una parte, los gastos de adquisición de bienes y servicios (ABS) han aumentado en conceptos que dejaron de ser inversión y pasaron a ser recurrentes en funcionamiento. Esto, sumado al impacto de la planta adicional en servicios ha llevado a un aumento del 404% de ABS entre 2022 y 2024.

De otra parte, en planta de personal ha habido un fortalecimiento importante en 2023 y 2024. En 2023 se implementó la planta adicional aprobada para tal vigencia y en 2024 está en curso la provisión gradual para planta adicional. La siguiente es la distribución por unidad de las plantas aprobadas en las vigencias señaladas:

Tabla 1. Planta adicional 2023-2024

Unidad	No. De cargos creados en 2023	No. De cargos creados en 2024
Magistratura	235	36
UIA	125	61
SEJEP	53	51
TOTAL	413	148

Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.



Por otra parte, las necesidades identificadas para el 2025, presentadas en este documento y sus anexos, también incluyen los requerimientos remitidos por el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

En la proyección presupuestal para 2025 se mantienen los gastos que permiten alinear a resultados y producción judicial que se requiere para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Jurisdicción en el límite de tiempo que se cuenta para ello y conforme lo establecido en el Plan estratégico cuatrienal 2023-2026.

Presentado lo anterior, es del caso anotar que este Anteproyecto cuenta con aprobación del Órgano de Gobierno de la Jurisdicción, en el marco de las competencias legales definidas para ello, encontrándose en curso la expedición del Acuerdo AOG No. 013 de 2024.

De esta manera, el presente documento de justificación está integrado por tres capítulos. El primero de ellos, Estructura organizacional hace un resumen de la creación y conformación de la JEP, señalando sus unidades; el segundo capítulo muestra los avances de la JEP en materia judicial y frente a los objetivos estratégicos; y el tercer capítulo se presenta una síntesis del comportamiento presupuestal y las necesidades para 2025.

Contenido

PRESENTACIÓN 2

Contenido..... 4

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..... 5

2. AVANCES EN RESULTADOS DE LA RUTA JUDICIAL DE LA JEP Y ACCESO A LA JUSTICIA 10

3. GESTIÓN PRESUPUESTAL..... 28

3.1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2018 - 2024 28

3.2. NECESIDADES PRESUPUESTALES 2025..... 31

3.2.1. Presupuesto de funcionamiento 2025 33

 i. Gastos de personal 33

 ii. Gasto de adquisición de bienes y servicios (ABS)..... 34

 iii. Gasto de transferencias corrientes para el Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad..... 36

3.2.2 Presupuesto servicio de la deuda 2025 39

3.2.3 Presupuesto de inversión 2025..... 39

3.2.4. Ajuste al tope presupuestal 2025 41



1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL¹

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Paz (SIP) o Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), incorporado en la estructura del Estado colombiano mediante el Acto legislativo 1 de 2017. Por esta razón, la Jurisdicción se encuentra separada orgánica y funcionalmente de la institucionalidad existente. No pertenece ni a la Rama Ejecutiva ni a la Rama Judicial del poder público, siendo una entidad judicial del orden nacional con independencia judicial y autonomía administrativa y presupuestal, con un régimen legal especial y exceptivo².

Para lograr su cometido, la JEP se compone organizacionalmente por 3 unidades: Magistratura, Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y Secretaría Ejecutiva (SEJEP). Además, cuenta con 5 comisiones reglamentarias como espacios de articulación intrainstitucional entre los órganos y dependencias que la conforman³. En garantía de su independencia y autonomía, en la JEP se ha previsto que su estructura incorpore funciones de gobierno judicial, a cargo del Órgano de Gobierno y la Presidencia de la Jurisdicción, y de gerencia judicial, a cargo de la SEJEP, como característica propia de su autogobierno judicial (Ver Ilustración 1)⁴.



Tomado de: JEP – Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2022. Fuente: SEJEP – Subsecretaría Ejecutiva. Elaboración: SEJEP – Subdirección de Planeación. (2020)

¹ El organigrama de la Jurisdicción puede consultarse en el siguiente enlace <https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx>

² Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 5º. Confirmado mediante Sentencia C- 674 de 2017.

³ Las 5 comisiones reglamentarias de la Jurisdicción son las siguientes: Étnica - Racial; de Género; Territorial y ambiental; de Participación; y de Implementación de política de justicia transicional.

⁴ “[...] el principio de autogobierno judicial exige que los órganos del gobierno y administración de las instancias jurisdiccionales conformen una estructura articulada y cohesionada endógena, capaz de conducir y permitir la marcha de la administración de justicia. Lo anterior exige que el órgano de administración no se superponga al órgano de gobierno “[...] el principio de autogobierno judicial exige que los órganos del gobierno y administración de las instancias jurisdiccionales conformen una estructura articulada y cohesionada endógena, capaz de conducir y permitir la marcha de la administración de justicia. Lo anterior exige que el órgano de administración no se superponga al órgano de gobierno. [...] Por tanto, para preservar el principio de autonomía judicial, resulta indispensable precisar que las funciones de gobierno y administración de la JEP se encuentran escindidas en dos órganos diferenciados: el Presidente o el que se establezca, a quien corresponde el gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz, y el Secretario Ejecutivo, a quien corresponde su administración, de acuerdo con las directrices y pautas fijadas por aquella otra instancia [...] En definitiva, entonces, la Corte concluyó que la separación orgánica entre quienes se encargan de administrar justicia, y quienes gobiernan y administran el sistema de administración de justicia, es consustancial a los principios de independencia judicial y de autogobierno judicial” (Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017)

La labor directa de administración de justicia transicional de la JEP recae en la Magistratura y la UIA, y sus funciones se apoyan con tareas puntuales de acceso a la justicia encargadas a la SEJEP. Mientras que la autonomía administrativa y presupuestal es imputable a las labores directas de gestión judicial que recaen, con diferentes implicaciones y limitaciones, en la Presidencia y el Órgano de Gobierno, la SEJEP, y la Magistratura, este último específicamente en lo que respecta a gestión de despachos y servicios judiciales (Ver Ilustración 1).

La Magistratura se conforma por 3 salas de justicia, el Tribunal para la Paz, el Grupo de Análisis de Información (GRAI), la Relatoría, y la Secretaría Judicial con sus secretarías judiciales ubicadas en cada sala y sección. Las 3 salas de justicia corresponden a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y la Sala de Amnistía o Indulto (SAI).

El tribunal para la Paz se compone por 5 secciones: Sección de Primera Instancia para los casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR), Sección de Primera Instancia para los casos con ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), Sección de Revisión de Sentencias (SR), y Sección de Apelación (SA). Además, una vez finalizado el término de funcionamiento de la JEP o al definirse su conformación, entrará en marcha la Sección de Estabilidad y Eficacia.

Por su parte, la UIA es el ente investigador y acusador de la Jurisdicción y, a su vez, tiene la competencia de decidir y monitorear la protección a la vida, seguridad e integridad de las víctimas, comparecientes y demás intervinientes ante la JEP⁵. En el ejercicio de sus funciones directas de investigación y acusación judicial para la administración de justicia, la UIA realiza actividades de policía judicial y efectúa la acusación en los casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

La SEJEP, además de cumplir las funciones administrativas en relación con la JEP, desarrolla labores misionales para disponer de diferentes mecanismos para el acceso a la justicia transicional y restaurativa que administra la Jurisdicción. En este aspecto, la SEJEP tiene a su cargo la gerencia judicial, a través de la administración, gestión y ejecución de los recursos; así como labores misionales que le permiten garantizar el acceso a la justicia, la atención, orientación y acompañamiento a víctimas, la administración del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), la promoción de la igualdad y no discriminación, la atención a la ciudadanía, y la gestión territorial.

El SAAD es el sistema de asesoría, acompañamiento, representación y defensa gratuita para víctimas y comparecientes⁶ que demuestren no tener los recursos para una

⁵ Lo relativo a las competencias de la UIA en materia de protección se encuentran definidos en la Ley 1957 de 2019 - Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, artículos 17, 87.

⁶ Las personas que se acogieron o fueron puestas a disposición de la JEP y para quienes la JEP asumió competencia, adquirieron la calidad de comparecientes, quienes a partir de la presentación del escrito de acusación se consideraran acusados.

participación idónea respecto a los trámites y actuaciones previstas en ella. Este sistema es integrado por abogados y abogadas cualificados y con capacidad de asistencia legal especializada y culturalmente pertinente en los casos requeridos.

Tal como se mencionó en la introducción, las tres unidades se han visto fortalecidos con nueva planta en las dos últimas vigencias. En 2023, el apoyo se centró especialmente en planta adicional para la Magistratura, orientada a fortalecer la labor del Tribunal de Paz (15 cargos), las 3 salas de justicia (154 cargos), la Secretaría General Judicial (62 cargos) y la Relatoría (4 cargos), en aras de poder desarrollar con mayor celeridad el proceso judicial, tanto dialógico como adversarial, y reconociendo en estas su condición de núcleo para el avance y obtención de logros judiciales.

Por su parte, los nuevos cargos de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA se crearon con el objeto de cumplir cabalmente con las funciones de policía judicial a cargo de la Unidad, aportando en la satisfacción del derecho a la protección a la vida, integridad y seguridad personales de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso ante la JEP (38 cargos); y fortalecer la labor de los grupos territoriales (87 cargos).

En lo que hace referencia a la Secretaría Ejecutiva, se buscó fortalecer el sistema restaurativo, con un equipo para apoyar con una mayor contundencia la implementación de sanciones propias y TOAR, monitoreo y seguimiento a comparecientes y, acompañamiento a proyectos restaurativos, labores de apoyo judicial ubicadas en la Secretaría Ejecutiva (29 cargos), así como dar apoyo administrativo a la planta adicional requerida en materia misional judicial (29 cargos).

En cuanto a la planta aprobada para implementar en 2024, se buscó fortalecer en primer lugar la Magistratura para atender el creciente número de diligencias judiciales, versiones libres y actuaciones que permitan avanzar en la ruta judicial con 36 magistrados auxiliares que pueden atender directamente estas labores y así contar con solución al cuello de botella que se estaba presentando.

Es por ello, que el nombramiento de los 36 magistrados se acompañó de un robusto equipo investigativo a través del reforzamiento de la planta de la UIA con 61 nuevos empleos específicamente concentrados en labores de investigación y acusación judicial.

Así mismo, se fortaleció el sistema restaurativo de la entidad con nueve (9) nuevos profesionales que podrán iniciar el acompañamiento, apoyar la definición de nuevos proyectos restaurativos, fortalecer el monitoreo a los beneficios y sanciones, así como avanzar en procesos de memorialización.

Por último, se decidió la formalización laboral de 42 contratistas que realizan la gestión y articulación territorial (26), y otros que fungen como enlace étnico (16), ubicados en la Secretaría Ejecutiva, toda vez que prestan una labor fundamental de apoyo a la

magistratura para todas sus actividades, como también a la UIA y a la SEJEP para concretar las diferentes acciones judiciales y restaurativas.

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La estructura organizacional de la JEP le ha facilitado avanzar en el establecimiento de elementos propios de direccionamiento estratégico que soportan y orientan su gestión por resultados. Es así como, siguiendo buenas prácticas de gestión pública, el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción adoptó, a través del Acuerdo AOG No. 22 de 2019, la plataforma estratégica de la JEP conformada por su misión, visión y objetivos estratégicos que desarrollan el marco normativo y de política pública aplicable a la Jurisdicción (Ver Ilustración 2).

De acuerdo con esta plataforma estratégica y en continuidad con la dinámica de direccionamiento estratégico, el Órgano de Gobierno adoptó el primer Plan estratégico cuatrienal PEC de la Jurisdicción para el período 2019 – 2022, mediante el Acuerdo AOG No. 43 de 2020, como instrumento fundamental de direccionamiento y planeación de mediano plazo, con vocación de política pública, coincidente con el cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo PND 2018 – 2022 y el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial PSDRJ 2019 – 2022. A partir de 2022, la Jurisdicción tuvo un proceso institucional de formular su segundo PEC para el período 2023 -2026, coincidiendo con la etapa de formulación de los nuevos PND y PSDRJ para el actual período.

Ilustración 2. Elementos de direccionamiento estratégico de la JEP



Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.



Al finalizar el período correspondiente al PEC 2023-2026, la JEP estará en la mitad de su línea de tiempo. Por ello, las definiciones estratégicas, metas y resultados esperados deben reflejar la actividad judicial plena y resultados en términos de la misión de la JEP, esto es, administrar justicia. Por tanto, se destacarán elementos judiciales, de acceso a la justicia y misionales para la concreción de resultados: i) resultados intermedios y finales de los macrocasos; ii) resolución de situación jurídica para quienes no son sancionados; iii) sistema restaurativo, procesos restaurativos y sanciones propias; y iv) monitoreo integral de beneficios, sanciones propias, régimen de condicionalidad y TOAR.

El PEC 2023-2026 es el instrumento de planeación y política pública de mediano plazo (4 años), que incluye las acciones y metas indispensables a 2026 para el cumplimiento de la misionalidad de la JEP, en el contexto de su estricta temporalidad y la relación sistémica entre los órganos que la integran. Es dinámico y su seguimiento permitirá definiciones adicionales.

Los ejercicios de carácter normativo, técnico y cuantitativo, bajo una visión sistémica, que hicieron parte de la elaboración del PEC, conllevaron a reconocer como principales postulados:

- El reconocimiento de los términos constitucionales y legales que enmarcan la estricta temporalidad de la JEP y la inviabilidad de modificarlos.
- Construcción colectiva en clave de pensamiento estratégico para la identificación de los desafíos de la Jurisdicción y acciones indispensables para el cumplimiento de la misionalidad, en un proceso que reivindica la importancia del trabajo de conjunto y la generación de consensos.
- Planeación sustentada en metas y acciones indispensables conducentes a garantizar la administración de justicia especial, transicional y restaurativa respecto de los comparecientes ante la JEP para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
- La interdependencia de funciones y atribuciones de Salas, Secciones, UIA y SEJEP y la relación sistémica entre órganos de la JEP, de manera que impactan entre sí su capacidad de acción y el avance en la ruta judicial.
- En el cuatrienio es determinante promover salidas procesales de las Salas de Justicia, para asegurar el avance en sistema y la generación de resultados esperados.
- Comprensión de la complejidad y particularidad del rol de la Jurisdicción en el SIVJRNR, no solo en conceptualización normativa sino el alcance que cubre las medidas de contribución a la reparación.
- La justicia restaurativa exige un trabajo de articulación y operación de un sistema interagencial complejo de medidas de contribución a la reparación que convocan al Estado, en lo que la puesta en marcha del **sistema restaurativo** es fundamental.
- El modelo de justicia transicional, restaurativa y prospectiva a cargo de la JEP ha permitido, la participación integral de las víctimas a través de **hechos restaurativos** tales como las entregas de informes, las intervenciones en las

audiencias públicas de reconocimiento y las medidas cautelares, así como la rendición de cuentas de los responsables de los principales crímenes y su asunción de responsabilidad y deberes de contribución a la reparación.

Además, permitió la definición de 62 acciones y metas indispensables distribuidas así: en salas de justicia y secciones del Tribunal para la Paz (35), UIA (10) y SEJEP (17). También, se incorporó la programación judicial de los 11 macrocasos con sus subcasos, así como las recomendaciones necesarias para lograr el avance planeado a 2026.

2. AVANCES EN RESULTADOS DE LA RUTA JUDICIAL DE LA JEP Y ACCESO A LA JUSTICIA

La JEP, como mecanismo de justicia transicional, restaurativa y prospectiva, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, hasta el 16 de diciembre de 2016. En consecuencia, *“la justicia transicional restaurativa tiene la doble misión de garantizar los derechos de las víctimas y brindar seguridad jurídica a los comparecientes, lo que exige tender un puente, encarnado en la aplicación del régimen de condicionalidad, entre ambos extremos procesales”*⁷.

En el marco de la justicia transicional, *“la justicia restaurativa no es un escenario de mediación, es un modelo de justicia en el que han de establecerse responsabilidades, destacando los derechos de las víctimas y sus necesidades, así como la seguridad jurídica y las necesidades del procesado”*⁸. En este escenario, *“lo restaurativo implica dar la oportunidad a la víctima de ser escuchada una y otra vez, brindarle la oportunidad de que cuente y recuente su vivencia, su dolor, sus angustias, y que el compareciente lo escuche y, en un acto voluntario, lo interiorice, recapacite, reflexione y se exprese a través de la petición de perdón, donde se busca privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones”*⁹.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas¹⁰ (en adelante, SRVR), es la encargada de iniciar el **procedimiento dialógico**, por ello, concentra su actividad en los hechos más graves o representativos del conflicto armado (que no serán sujetos de amnistía o indulto), para que, por medio de un procedimiento restaurativo entre comparecientes y víctimas, se contribuya al esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido y se promueva el reconocimiento de

⁷ Rojas B, Danilo (2020). Introducción de la “La JEP visto por sus jueces 2018 - 2019”, pg. 9.

⁸ Suárez A, Camilo (2020). Introducción de la “La JEP visto por sus jueces 2018 - 2019”, pg. 146.

⁹ Ibidem.

¹⁰ La SRVR tiene, en este sentido, las siguientes funciones: i) recibir los informes que le presenten entidades estatales; organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y de derechos humanos colombianas (, y contrastarlos con el material probatorio recaudado (Ley 1957 de 2019, artículo 79, literal h; Ley 1922 de 2018, artículo 27B); ii) recibir versiones, individuales o colectivas, de los comparecientes, relacionadas con su aporte a la verdad y al reconocimiento de su responsabilidad; y iii) remitir a la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas los casos de las personas que no puedan ser objeto de amnistía o indulto, que no serán incluidas en la Resolución de Conclusiones, ni habrá de exigírseles responsabilidad ante el Tribunal (Ley 1957 de 2019, artículo 79).

responsabilidad de quienes se consideren máximos responsables. La SRVR es la encargada de dar apertura a los macrocasos a investigar, desarrollar acciones de contrastación de la información, determinar los hechos y conductas atribuibles a los máximos responsables (y quienes no reconozcan responsabilidad remitirlos a la vía adversarial), realizar audiencias públicas de reconocimiento y proferir resoluciones de conclusiones.

En el marco del procedimiento dialógico, la Sección de primera instancia para casos de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas será la encargada de la evaluación de correspondencia, proferir sentencias y determinar las correspondientes sanciones propias.

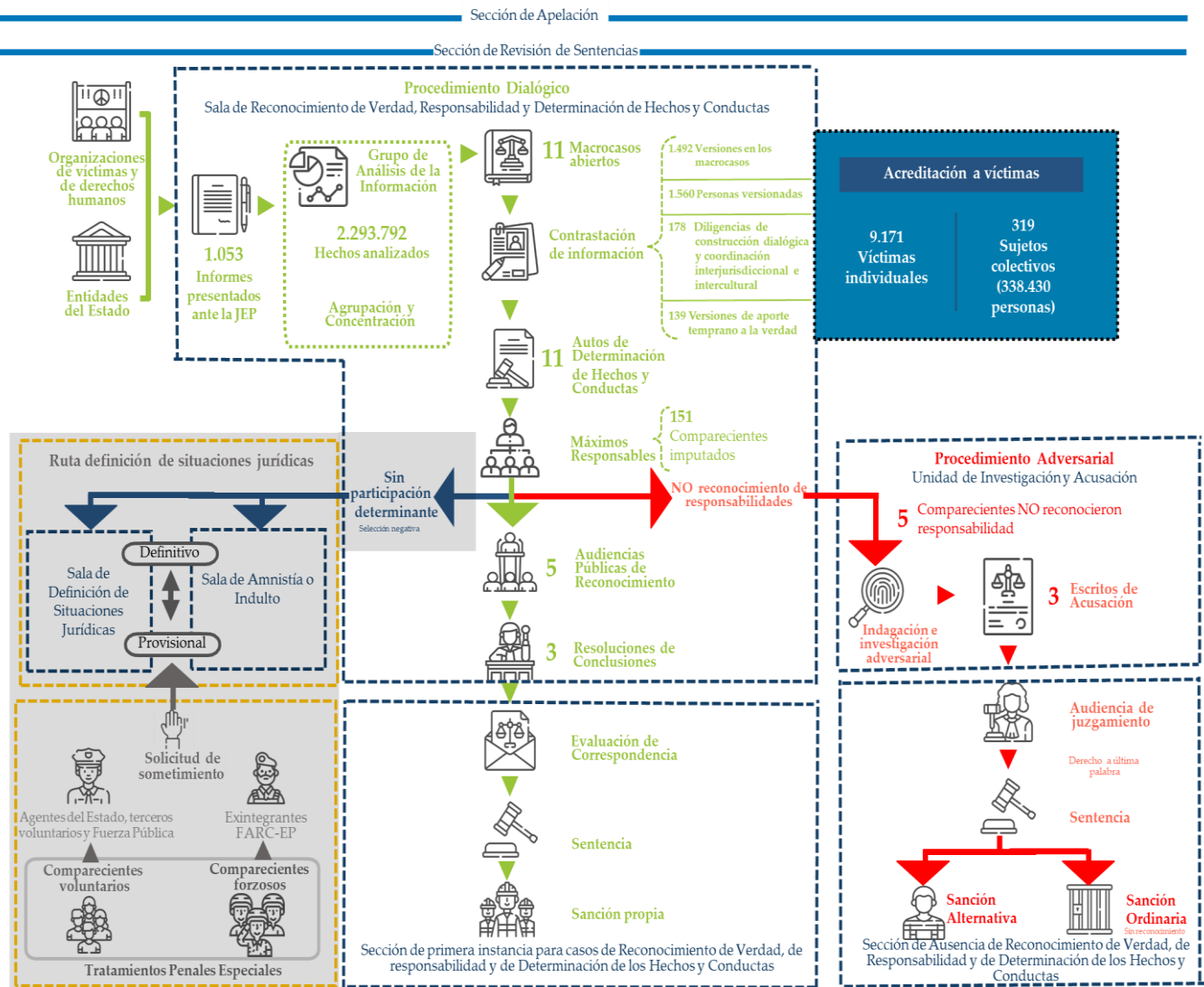
Dentro de las reglas establecidas en el procedimiento de la JEP, se denomina procedimiento adversarial cuando los máximos responsables no reconocieron verdad y responsabilidad de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Una vez activado este proceso, la UIA debe presentar su escrito de acusación ante la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad - SAR, en un término no superior a 60 días, el cual se trasladará a los sujetos procesales e intervinientes para que se pronuncien en el término de 10 días.

Luego, la SAR debe adelantar la audiencia pública preparatoria para posteriormente practicar la audiencia de juzgamiento con presencia de todos los sujetos procesales e intervinientes especiales. Antes de proferirse la sentencia, los comparecientes podrán realizar un reconocimiento pleno y exhaustivo de verdad y responsabilidad que eventualmente los hará receptores de sanciones alternativas, cuya función esencial es retributiva. Por su parte, cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, la SAR impondrá una sanción ordinaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los principales avances y resultados del procedimiento dialógico y el procedimiento adversarial, a corte de 31 de diciembre de 2023.

Ilustración 3. Principales resultados del procedimiento dialógico y adversarial



Fuente: FEC-SRVR, FEC-GRAL, FEC-UIA. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

Las dos rutas (dialógica y adversarial) del proceso general judicial en la JEP finalizan con la imposición de las sanciones a comparecientes. La Jurisdicción tiene competencia para imponer 3 tipos de sanciones. La aplicación de cada una depende del grado de reconocimiento y aporte pleno exhaustivo y detallado a la verdad y al reconocimiento de la responsabilidad, así como del momento en el que se realice dicho reconocimiento, así (Ver ilustración 3):

- Sanciones ordinarias, que se pueden imponer cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad en ninguna etapa del procedimiento dialógico ni adversarial surtido ante la JEP. Estas sanciones podrán tener una duración de 15 a 20 años.
- Sanciones alternativas, que se pueden imponer cuando el reconocimiento de verdad y responsabilidad se realiza de forma tardía en la ruta adversarial, pero en todo caso antes de que el Tribunal dicte sentencia. Estas sentencias podrán tener una duración de 5 a 8 años.

- Sanciones propias, que se pueden imponer cuando el reconocimiento se realiza ante la SRVR durante el proceso dialógico. Estas sentencias podrán tener una duración de 5 a 8 años.

Las sanciones propias y alternativas tendrán una duración de entre 2 y 5 años para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas.

En la imposición de sanciones, las sentencias de la JEP deben establecer de manera precisa, cuál es el contenido de la sanción, sus componentes reparador y restaurador, las condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, cuando procedan, el lugar donde esta se ejecutará, las condiciones y efectos de las sanciones impuestas a delitos no amnistiables, las condicionales, criterios y mecanismos de monitoreo administrativo y verificación judicial de las sanciones, los enfoques diferenciales y, en suma, una oferta que garantice la centralidad de las víctimas.

Teniendo en cuenta los criterios definidos para la garantía judicial a las personas que comparecen ante la JEP, la Sala de Amnistía o Indulto y la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, son las encargadas de realizar procedimientos establecidos en la resolución de situaciones jurídicas en el marco de la administración de administración de justicia transicional. En la siguiente ilustración se presentan los principales resultados judiciales obtenidos por estas Salas, a corte de 31 de diciembre de 2023.

Ilustración 4. Resultados de la ruta de definición de situaciones jurídicas



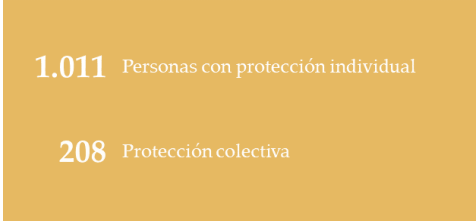
Fuente: FEC- SEJEP-DGD, FEC-SAI, FEC-SDSJ. Elaboración: SEJEP -Subdirección de Planeación.

De conformidad con lo consignado en el Acuerdo Final, en su apartado 5.1.2, apartado III, numeral 51, literal b, se facultó al director de la Unidad de Investigación y Acusación, para “decidir las medidas de protección aplicables a víctimas, testigos y demás intervinientes”, en términos generales. La Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, en su artículo 87,



establece que será función del director de la Unidad de Investigación y Acusación UIA: “...b) Decidir, de oficio o a solicitud de las Salas o Secciones de la JEP, las medidas de protección aplicables a víctimas, testigos y demás intervinientes...”. En cumplimiento de esta disposición legal y en atención a los enfoques en que se sustenta esta justicia transicional, en la siguiente ilustración se presentan los resultados de personas y colectivos protegidos.

Ilustración 5. Resultados de personas y comunidades protegidas



Fuente: Unidad de Investigación y Acusación, corte 31 de octubre de 2023.
Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

La Secretaría Ejecutiva - SEJEP, se encarga de la gerencia judicial a través de funciones misionales, estratégicas y administrativas. Tiene a su cargo la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz en coordinación con la Presidencia y el Órgano de Gobierno. También tiene a su cargo labores misionales a través de las cuales pone a disposición de los sujetos de derechos los mecanismos de acceso a la justicia; en tal sentido le corresponde: i) administrar el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) en sus componentes de asesoría y representación a víctimas y de asesoría y defensa judicial a comparecientes para garantizar a víctimas y procesados el acceso a la justicia, la participación, la comparecencia, la seguridad y el cumplimiento de la justicia transicional; ii) coordinar acciones interinstitucionales para garantizar a las víctimas y a los procesados el acceso a la justicia, la participación, la defensa, la comparecencia, la representación judicial, la seguridad y el cumplimiento de la justicia transicional, la atención a las víctimas; iii) desarrollar la ruta de atención a la ciudadanía; iv) impulsar los enfoques diferenciales, el territorial y el de género e implementar mecanismos y medidas administrativas para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI); y v) impulsar el Sistema Restaurativo comprendiendo el monitoreo integral y la memorialización y fortalecer los diferentes procesos de justicia restaurativa.

En la siguiente ilustración, se presentan los principales resultados de la SEJEP en clave de acceso a la justicia y justicia restaurativa.



Ilustración 6. Resultados de acceso a la justicia e impulso del Sistema Restaurativo

Representación a víctimas		Defensa técnica a comparecientes	
Asesoría Jurídica	Representación judicial	Asesoría Jurídica	Representación judicial
12.052 víctimas individuales 11 sujetos colectivos	9.151 víctimas individuales 367 sujetos colectivos	18.863 comparecientes Corte 27.12.2023	5.536 comparecientes Corte 27.12.2023
Procesos preparatorios en audiencias y diligencias judiciales en la JEP			
» 10 Encuentros preparatorios de audiencias de medidas cautelares	» 9 Mesas técnicas de seguimiento de medidas cautelares	» 6 Acompañamientos a diligencias de entregas dignas	» 35 Propuestas metodológicas restaurativas
» 2 Procesos preparatorios restaurativos en audiencia de reconocimiento	» 1 Proceso preparatorio de audiencia única de verdad	» 8 Audiencias de medidas cautelares	
Proyectos restaurativos exploratorios			
RESTAURÁNDONOS, medio ambiente naturaleza y territorio			
REENCONTRARNOS, acción integral contra minas			
ARMONIZÁNDONOS, enfoque diferencial en restauración sociocultural y territorial de pueblo Awa			
Acciones de preservación y difusión de la memoria institucional			
El Fondo Documental de la Comisión de la Verdad fue incluido en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO			

Fuente: FEC- SEJEP-SAAD VÍCTIMAS, FEC- SEJEP-SAAD COMPARECIENTES, SEJEP-Oficina Asesora Justicia Restaurativa, SEJEP- Oficina Asesora Estructuración de proyectos y SEJEP-Oficina Asesora de Memoria Institucional. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

Proceso judicial dialógico

El objetivo del proceso judicial dialógico consiste en determinar la sanción propia a aplicar a los máximos responsables de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, en función de su reconocimiento de la verdad y responsabilidad.

A partir de los derechos a la verdad y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la concesión de beneficios y las sanciones a imponer por parte de la JEP está condicionada al reconocimiento de verdad y responsabilidad y a la contribución a la reparación a las víctimas y a los procesos restaurativos por parte de los comparecientes.

En esta medida, cuando quien hubiere comparecido ante la JEP realice un reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad, exhaustivo y detallado, será sujeto de un proceso dialógico que inicia ante la SRVR y que continúa ante la SeRVR.

Dentro de este proceso, la SRVR puede convocar versiones voluntarias libres para que la persona implicada, mediante un informe o declaración de reconocimiento, rinda voluntariamente su versión sobre los hechos, reconociendo o no verdad y responsabilidad. Estas diligencias cuentan, además, con la presencia del Ministerio Público y las víctimas, si estas así lo deciden.



Luego de la contrastación de los informes con las observaciones de las víctimas y del Ministerio Público y las declaraciones de los comparecientes, la SRVR debe emitir el denominado auto de determinación de hechos y conductas, a través del cual establece los hechos que se le atribuyen a los máximos responsables, para que éstos decidan comparecer o no, a efectos de realizar el aporte y reconocimiento de verdad y responsabilidad. Con esto, la SRVR puede convocar una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en la que las víctimas pueden presentar sus demandas de verdad e interactuar en un proceso dialógico con los responsables.

En caso de que el compareciente no desee realizar el reconocimiento voluntario de verdad y responsabilidad, se romperá la unidad procesal respecto de quienes sí lo hagan e iniciará un proceso adversarial. Para estos efectos, el expediente se remitirá a la UIA, con el fin de que esta evalúe la procedencia de la acusación del compareciente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento y continúe la ruta adversarial.

Durante todo el procedimiento, las víctimas pueden presentar sus observaciones e interactuar de conformidad con lo señalado en la Ley 1922 de 2018 (artículo 27D, entre otros) y en la sentencia interpretativa 3 parcial de la Sección de Apelación.

En lo que concierne a quienes sí reconocen verdad y responsabilidad, la SRVR debe presentar su resolución de conclusiones ante la SeRVR, identificando los casos más graves y las conductas o prácticas más representativas, la individualización de las responsabilidades, la calificación jurídica de las conductas, los reconocimientos de verdad y responsabilidad y el proyecto de sanción propuesto.

A partir de este momento, la SeRVR debe realizar el análisis de correspondencia entre las conductas reconocidas, sus responsables y las sanciones a impartir, de conformidad con la resolución de conclusiones proferida por la SRVR. Con tal fin, la SeRVR debe realizar una audiencia pública para verificar el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y a la forma de reparación, también en presencia y con participación de las víctimas. Sobre la base de este proceso dialógico la SeRVR impondrá la sanción propia correspondiente.

La primera expresión del derecho a la participación de las víctimas ante la Jurisdicción se realiza a través de la entrega de informes⁸. A partir de la recepción, sistematización y análisis de estos informes, la SRVR avanza en la construcción y delimitación del universo provisional de hechos y situaciones de su competencia (agrupación), que posteriormente le ha servido para realizar la primera y segunda ronda priorización de hechos y conductas que redunda en la apertura de macrocasos (concentración) y también considera los criterios de priorización definidos por la SRVR.

A corte de 31 de diciembre de 2023, la JEP recibió 1.053 informes¹¹, de los cuales el 93.2% se entregaron hasta el 21 de marzo de 2022, y el 6.8% se entregaron de forma

¹¹ A través de la presentación de informes, las organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos tienen la

extemporánea. 901 informes fueron presentados por organizaciones de víctimas, 26 de entidades con funciones judiciales, disciplinarias y fiscales, 125 de otras entidades del Estado y 1 informe de base de datos de la Secretaría Ejecutiva.

La Jurisdicción Especial para la Paz investiga 11 macrocasos, 7 de ellos se abrieron en la primera ronda de priorización, en donde se investigan y juzgan las siguientes situaciones territoriales: *situación territorial de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas del departamento de Nariño (caso 2), situación la región de Urabá abarcando los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba en el departamento de Antioquia, y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí en Chocó (caso 04) y situación territorial de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio y Caldono en el departamento del Cauca (caso 05).*

Adicional, los casos sobre *Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP (caso 01), asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado (caso 06) victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 03) y reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado (caso 07),* se concentran en conductas dadas en todo el territorio nacional en el marco del conflicto armado.

Entre el 2022 y 2023, se dio apertura a segunda ronda de priorización la cual comprende casos de alcance nacional sobre multiplicidad de conductas ocurridas en el marco y por ocasión del conflicto armado. Concretamente, el caso 08 investigan crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado, *el caso 09 investiga los crímenes contra pueblos y territorios étnicos en el conflicto armado , el caso 10 investiga crímenes no amniables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano , y el caso 11 investiga violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.*

En la siguiente ilustración se presenta los avances y resultados de la SRVR en materia de los macrocasos investigados por la JEP en el marco del procedimiento dialógico.

oportunidad de participar en la JEP dando a conocer la información relevante que posean sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto armado. Los informes son documentos que se pueden presentar para exponer los datos relevantes, pertinentes relativos al impacto diferencial relacionado con hechos ocurridos con ocasión y durante el conflicto armado. Estos informes también pueden ser presentados por la FGN, los órganos competentes de la justicia penal militar, las autoridades competentes de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), la PGN, la CGR y cualquier jurisdicción que opere en Colombia. La fecha máxima para presentación de informes a la JEP fue el 21 de marzo de 2022. La cifra reportada corresponde al trabajo interno desarrollado dentro de la Secretaría Judicial, de reparto, digitalización y radicación de informes.

Ilustración 7. Avances generales judiciales macrocasos



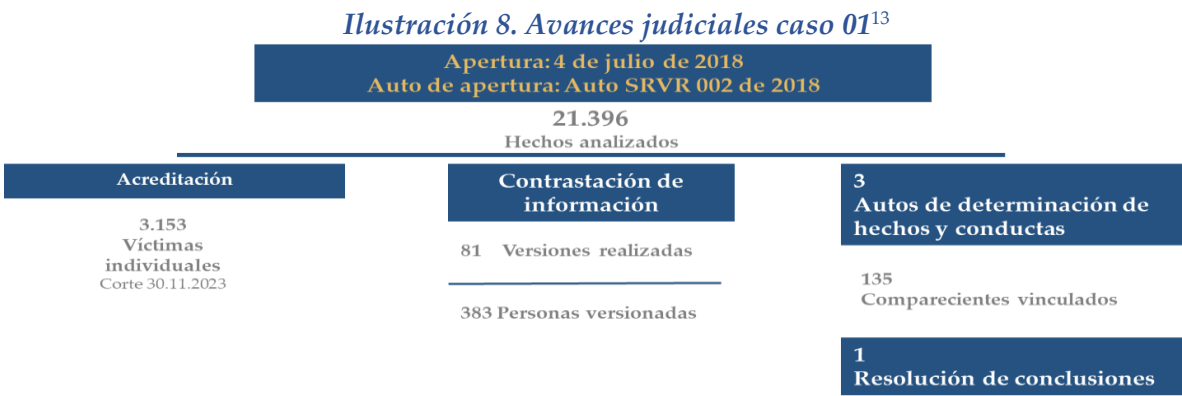
Fuente: FEC- SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva y FEC-SRVR. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación

A continuación, se presentan los principales resultados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, por cada uno de los macrocasos abiertos.

- Macrocaso 01 (abierto el 4 de julio de 2018) - Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP

En el Auto SRVR N°02 del 04 de julio de 2018, la JEP identificó que entre 1990 y 2016, 21.396 personas fueron víctimas de secuestro luego de la consolidación de distintas fuentes estatales y organizaciones de víctimas. Respecto al total de víctimas citado se pudo determinar en el mismo periodo, con base en el Registro Único de Víctimas (RUV), que al menos un 8,7% también fue víctima de desaparición forzada y 2,9% de homicidio aun teniendo en cuenta el subregistro y otros problemas encontrados en las fuentes de información.¹²

En la siguiente ilustración se presentan los principales avances del caso:



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 30 de noviembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

¹² Ver numeral 258 ubicado en las páginas 89 y 90 del Auto SRVR N°19 del 26 de enero de 2021.
¹³ ADHC: Auto_SRVR-08_19-diciembre-2023, Auto_SRVR-ADHC-01_04-julio-2023 Y Auto_SRVR-019_26-enero-2023.
Resolución de conclusiones: Resolución_SRVR-02_24-noviembre-2022.
En: <https://relatoria.jep.gov.co/caso001>



- **Macrocaso 02** (abierto el 10 de julio de 2018) - Grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)

Mediante Auto SRVR N° 004 del 2018 se priorizaron los hechos victimizantes acaecidos en el departamento de Nariño, donde se identificó que, entre 1995 y 2012, ocurrieron al menos 166 homicidios de indígenas Awa, 10 masacres con 57 víctimas mortales, 18 desplazamientos masivos que pueden llegar a representar 4.800 personas del pueblo Awá y 103 víctimas de minas antipersona y munición usada sin explotar. El macrocaso actualmente agrupa un total de 3.000 hechos victimizantes bajo estudio.

En la siguiente ilustración se presenta el avance procesal de este macrocaso:



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 31 de octubre de 2023.
Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

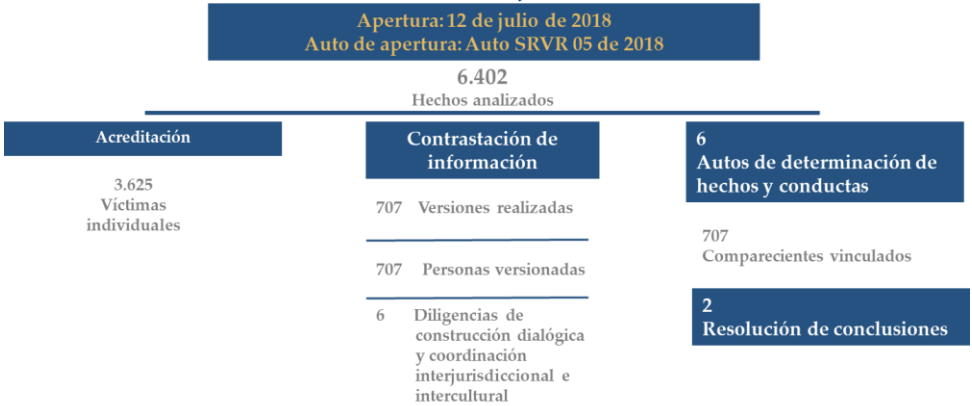
- **Macrocaso 03** (abierto el 17 de julio de 2018) - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado

En el Auto N° 033 del 12 de febrero de 2021, la SRVR estableció, como resultado de la consolidación diferentes fuentes de información, 6.402 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate a nivel nacional entre 2002 y 2008. Posteriormente, mediante el Auto N° 125, proferido el 02 de julio de 2021 por la SRVR, se determinó en su parte resolutoria que 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo del departamento de Norte de Santander con el objetivo de ser presentadas ilegítimamente como bajas de combate por agentes del Estado.

En la siguiente ilustración se presentan los principales avances del caso:

¹⁴ ADHC: Auto_SRVR-ADHC-03_05-julio-2023. En: <https://relatoria.jep.gov.co/caso002>

Ilustración 10. Avances judiciales caso 03¹⁵



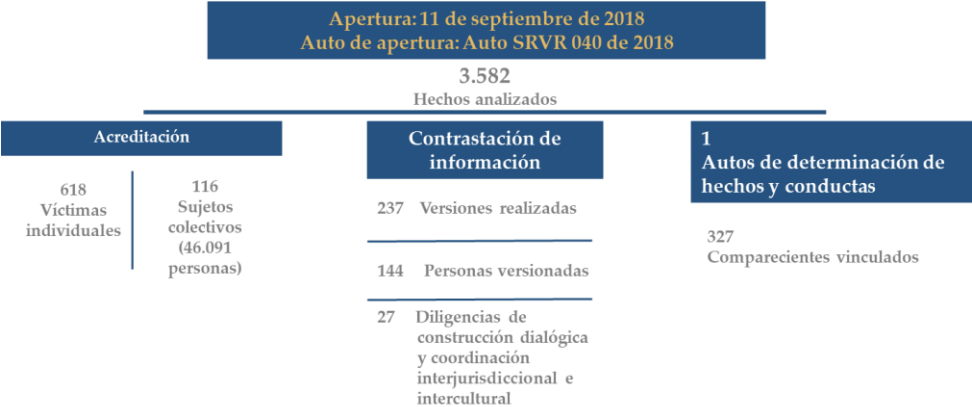
Fuente: SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 31 de octubre de 2023.
Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

- Macrocaso 04 (abierto el 11 de septiembre de 2018) - Situación territorial en la región de Urabá.

En el Auto SRVR N°040 del 11 de septiembre de 2018 se elaboró un análisis cuantitativo de los datos entregados por la Fiscalía General de la Nación y se identificó un total de 4.478 víctimas de casos judicializados. Complementariamente, se identificó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas registró 787.000 víctimas en la región del Urabá por hechos victimizantes de desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio.

Dentro de los avances procesales del caso se identifican:

Ilustración 11. Avances judiciales caso 04¹⁶



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 30 de noviembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

¹⁵ ADHC: Auto_SRVR-SUB-D-062_30-agosto-2023, Auto_SRVR-SUB-D-055_14-julio-2022, Auto_SRVR- 128_07-julio-2021, Auto_SRVR-125_02-Julio-2021, Auto SRVR SUB_D_062_30-Agosto-2023 y AUTO SUB D- SUBCASO HUILA-081 de 2023.
Resolución de conclusiones: Resolución_SRVR-03_07-diciembre-2022 y Resolución_SRVR-01_20-octubre-2022. En: <https://relatoria.jep.gov.co/caso003>

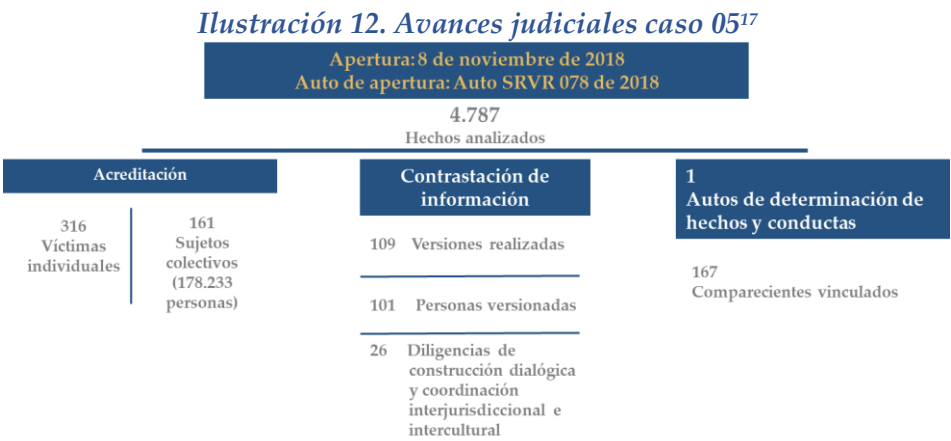
¹⁶ ADHC. Auto_SRVR 01/22, articula la investigación instruida por el Caso 03 y el Caso 04.



El 26 y 27 de junio de 2023, se adelantó la Audiencia de reconocimiento de verdad en Dabeiba (Antioquia) para los casos 03 y 04, en la que 8 máximos responsables aceptaron responsabilidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006, y que fueron presentados como bajas en combate e inhumadas en el cementerio “Las Mercedes” de Dabeiba.

- **Macrocaso 05** (abierto el 8 de noviembre de 2018) - Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca

Mediante el Auto SRVR N°078 de 2018 se reconoce el norte del Cauca como una de las regiones gravemente afectadas por el conflicto armado. Específicamente, en los municipios de Buenos Aires, Caldoño, Caloto, Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Toribio y Suárez, que agrupan la tercera parte de las víctimas del departamento, 71% de las MAP, 35% de ataques a la población civil, 29% de reclutamiento y violencia sexual, 26% del desplazamiento forzado, 24% de las amenazas de violencia, 23% de las muertes, 22% de la desaparición forzada y 20% de retenciones ilegales. En la siguiente ilustración se presentan los principales resultados del caso.



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva y FEC SRVR a corte 31 de diciembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

El 17 de julio de 2023, la JEP acreditó al río Cauca como víctima de graves afectaciones sufridas en el conflicto armado en Colombia, lo anterior tuvo como consideraciones las graves afectaciones que vivió este importante afluente, durante el conflicto armado, además de analizar que el río Cauca se utilizó como fosa común de los grupos paramilitares con el apoyo de miembros de la fuerza pública, con quienes existió una alianza en el Cauca y el Valle del Cauca.

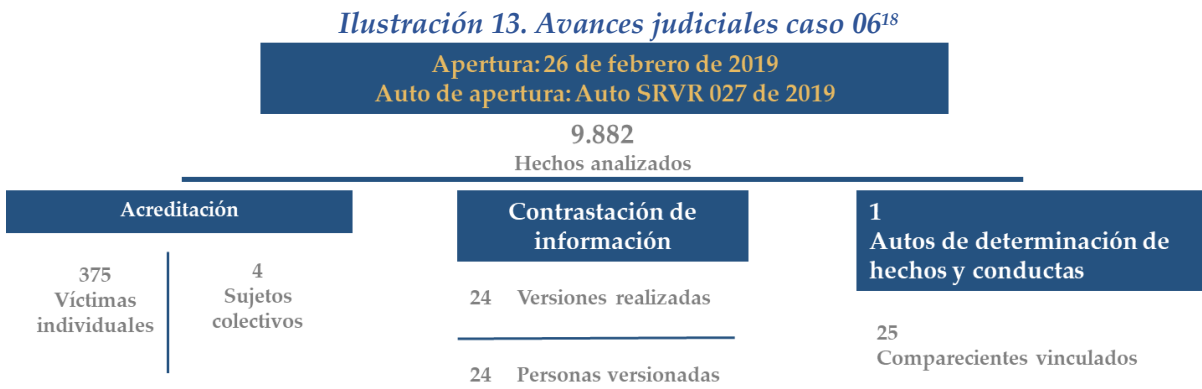
- **Macrocaso 06** (abierto el 26 de febrero de 2019) - Victimización de miembros de la Unión Patriótica

En el Auto SRVR N° 027 del 26 de febrero de 2019 se identificó la existencia de prácticas y patrones de violencia contra los miembros de la UP en al menos 27 departamentos del país, cuya concentración ocurrió en los territorios del Costa Caribe, Magdalena Medio, Meta, nororiente y nordeste antioqueños, sur del país y Urabá desde 1984.

¹⁷ ADHC: Auto_SRVR-01_01-febrero-2023. En: <https://relatoria.jep.gov.co/caso005>



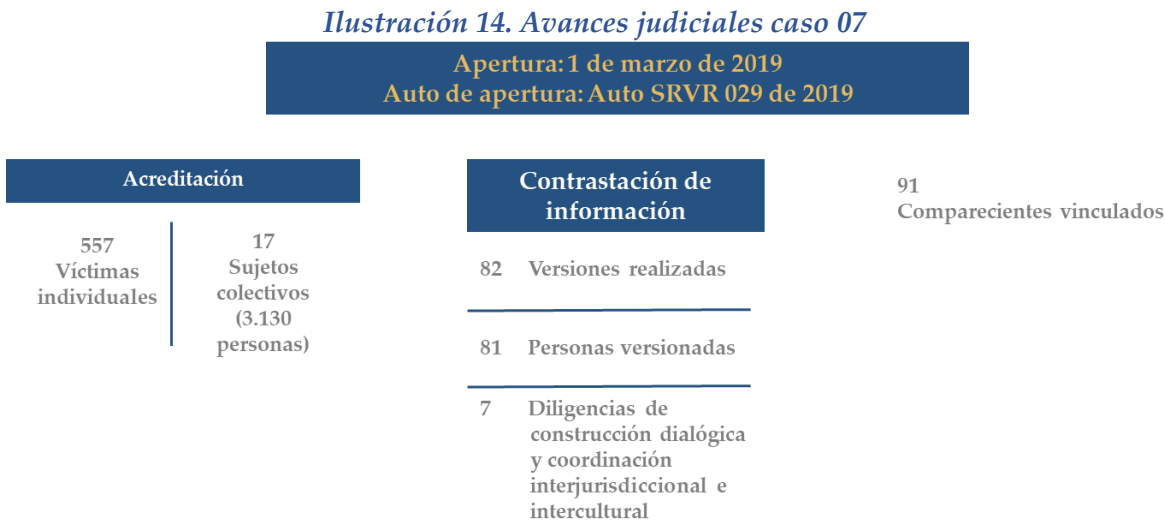
En la siguiente ilustración se presenta el avance procesal de este macrocaso:



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 30 de noviembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

- **Macrocaso 07** (abierto el 1 de marzo de 2019) - Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano

Según Auto SRVR N°032 de 2022 se estima que las víctimas directas ascienden a 18.677 por reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. Es importante mencionar que la Sala tiene bajo investigación las siguientes conductas asociadas con el reclutamiento de niños y niñas: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, Tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. En la siguiente ilustración se presentan los principales avances del caso.



Fuente: FEC SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva y FEC SRVR a corte 31 de diciembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

- **Macrocaso 08** (abierto el 30 de agosto de 2022)- Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles que investiga violencia sexual y basada en género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y despojo de tierras

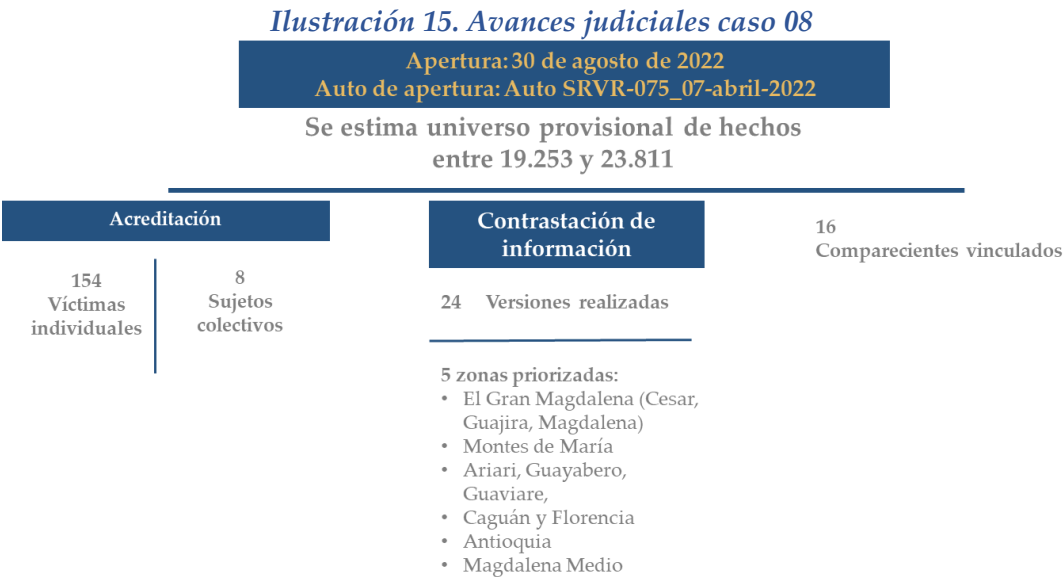
¹⁸ ADHC: Auto_SRVR-075_07-abril-2022. En: <https://relatoria.jep.gov.co/caso006>



En el Auto SRVR N°104 del 30 de agosto de 2022 se identificó un universo provisional de hechos de 72.492 víctimas y 14.806 presuntos responsables de hechos relacionados con homicidios, desplazamiento forzado, amenaza, tortura, desaparición forzada entre otros como se muestra en mayor detalle en la providencia citada.

En la investigación de este caso se ha identificado preliminarmente que los homicidios constituyeron el tipo de conducta que más víctimas produjo presuntamente la fuerza pública con 8.345 víctimas, le siguen el desplazamiento forzado con 2.904 víctimas, luego amenazas 1.638 víctimas, tortura 1.249 víctimas y la desaparición forzada 1.136 víctimas. Por otra parte, a los paramilitares se les responsabiliza por presuntamente causar desplazamientos forzados al contabilizarse 39.659 registros de víctimas, seguidas por el homicidio con 7.082 víctimas y el abandono o despojo de tierras con 4.582 víctimas.

Por último, haciendo un análisis temporal de las víctimas atribuibles a la Fuerza Pública, el universo provisional de hechos muestra que 2006 fue el año con mayor número de víctimas registradas con un total de 1.218. El período de 2000-2009 concentra el 51% de las víctimas de la Fuerza Pública y el 63% de las víctimas atribuibles a grupos paramilitares. Mientras que para las víctimas causadas por personas con la calidad de AENIFPU y terceros civiles se concentró el 86.7% en la década de 1990-1999. En la siguiente ilustración se presentan los principales avances judiciales del caso.



Fuente: FEC-SEJEP-Subsecretaría Ejecutiva corte 31 de diciembre de 2023 y FEC SRVR a corte 30 de noviembre de 2023. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

- **Macrocaso 09** (abierto el 07 de septiembre de 2022) - Crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos que investiga masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza, territorio y daño socioambiental y otros repertorios de violencia asociados como violencia sexual y desaparición forzada cometidos por todos los actores del conflicto comparecientes obligatorios y voluntarios ante este Jurisdicción.



En el Auto N°105 del 07 de septiembre de 2022 que dio apertura al macrocaso se construyó el universo provisional de hechos del caso con 1.350.181 víctimas con pertenencia étnica, según la información disponible, y el subregistro en la materia. Las conductas que mayor número de víctimas han generado en contra los Pueblos y Territorios Étnicos son: desplazamiento forzado con más de 96% de las víctimas (1.308.023 víctimas), seguidas por el homicidio (20.920 víctimas), violencia sexual (8.942 víctimas), desaparición forzada (6.701), reclutamiento (2.475) y secuestro (3.120 víctimas).

La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera agrupan el 75% de las víctimas identificadas en los hechos reportados en los informes recibidos; el 23% de las víctimas se identificó con pueblos indígenas y el 2% con pueblos Rrom, respecto al total de víctimas con pertenencia étnica.

Según la información disponible, los paramilitares cometieron más hechos de desaparición, homicidio y violencia sexual contra personas con pertenencia étnica que los otros actores; mientras que las guerrillas, especialmente las FARC-EP, cometieron más hechos de reclutamiento forzado y secuestro (pág. 36 Auto SRVR N°105/2022). En 2006, se presentó el mayor pico de víctimas con pertenencia étnica respecto a la conducta de desplazamiento forzado.

- **Macrocaso 10** (abierto el 15 de julio de 2022) - Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC por causa, con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano

La apertura del macrocasos se formalizó a través del Auto SRVR N°102 del 11 de junio de 2022, el cual determinó preliminarmente que el total de víctimas atribuibles a las FARC-EP corresponde a cerca de 205.898 personas, de las cuales, el 27% son víctimas de desplazamiento forzado, 24% por el uso de Medios y Métodos Ilícitos de Guerra (MMI), 23% a homicidios, 12% a secuestro, 7% a desaparición, 6% a reclutamiento y el 1% a violencia sexual.

En los informes sistematizados respecto a MMI, específicamente sobre el uso de minas antipersonal y munición usada sin explosionar, con información de la autoridad gubernamental que lidera la Acción Integral contra Minas Antipersonal, se pudo identificar a las FARC-EP como presunto autor de 5.413 víctimas por accidentes por MAP/MUSE. La política de Acción Integral contra Minas Antipersonal y Munición Sin Explosionar estima que 60% de las víctimas por MAP/MUSE son integrantes de la Fuerza Pública y 40% corresponden a civiles (pág. 62 Auto SRVR 102/2022).

- **Macrocaso 11** (en fase de agrupación y concentración) - Concentración sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado

Para la apertura de este nuevo macrocaso, la Sala ha tomado en consideración: i) los mandatos que le asisten a la JEP de adoptar un enfoque diferencial e interseccional en la respuesta institucional a las violencias de género; ii) las observaciones, consideraciones y propuestas presentadas por las víctimas, la sociedad civil, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Género de esta jurisdicción y, de manera especial, por las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gay, transgénero, queer y no binarias, en torno a la necesidad e importancia de un macrocaso que investigara de manera concentrada y específica estas conductas; y iii) los hallazgos de la fase de agrupación y concentración que se llevó a cabo en virtud del auto SRVR No. 103 de 2022.

En el marco de la labor de agrupación, se encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. De ellas, el 89,2 por ciento son mujeres y el 35 por ciento sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes. Aunque en el 78 por ciento de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se cuenta con información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom.

El análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable.

La Sala determinó que los hechos de violencia de género y por prejuicio se dieron con ocasión del conflicto armado ya que los perpetradores se sirvieron del lugar de dominio que les dio las armas y del ejercicio del poder armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes. Los hallazgos cualitativos preliminares revelaron factores comunes en los hechos atribuibles a distintas organizaciones armadas, como su enraizamiento en una cultura patriarcal, pero también evidencia la existencia de factores diferenciales en el accionar de cada grupo.

Por ello, la Sala determinó que la investigación de los nuevos patrones identificados en el macrocaso 11 se realizará bajo tres subcasos: i) Subcaso 1, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las Farc-EP; ii) Subcaso 2, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública; y iii) Subcaso 3, Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las Farc-EP.

De los 11 macrocasos abiertos por la SRVR, a corte 31 de diciembre de 2023, han sido relacionados 151 comparecientes en los 11 Autos de Determinación de Hechos y Conductas, de los cuales han reconocido verdad completa, detallada y exhaustiva y su responsabilidad, 30 de ellos han sido incluidos en 3 resoluciones de conclusiones de la SRVR como máximos responsables que han aportado verdad y han aceptado

responsabilidad, por lo tanto siguen su ruta dialógica en la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz.

○ Sanciones propias¹⁹

En el procedimiento dialógico, la JEP impone sanciones propias a quienes reconozcan responsabilidad y verdad exhaustiva, detallada y plena ante la Sala de Reconocimiento²⁰, las cuales tienen un contenido restaurador, reparador y que garantice la no repetición de los hechos. Para ello los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán²¹, y se materializa por medio de los trabajos, obras y actividades (en adelante TOAR).

En el marco de las sanciones propias, La JEP tiene la competencia de definir, imponer, certificar y monitorear las sanciones propias, que deben: i) contener un componente esencialmente restaurativo, a través de la ejecución de TOAR; ii) ser consultados con las víctimas; y iii) en cuya ejecución se incluye necesariamente un componente de restricción efectiva de libertades y derechos.

A corte de 31 de diciembre de 2023, se cuenta con 3 proyectos restaurativos exploratorios, referidos en la siguiente ilustración, finalizando la fase de estructuración y financiación. Los proyectos restaurativos buscan desarrollar siete líneas de trabajo: Memoria, dignificación y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, infraestructura, acción integral contra minas antipersonal, educación y cultura, proyectos productivos, recuperación y promoción ambiental, y daños diferenciales.

Ilustración 16. Proyectos restaurativos exploratorios

PROYECTO RESTAURATIVO 1: RESTAURÁNDONOS, medio ambiente naturaleza y territorio
PROYECTO RESTAURATIVO 2: REENCONTRARNOS, acción integral contra minas
PROYECTO RESTAURATIVO 3: ARMONIZÁNDONOS, enfoque diferencial en restauración sociocultural y territorial de pueblo Awa

Fuente: SEJEP- Oficina Asesora Estructuración de proyectos. Elaboración: SEJEP-Subdirección de Planeación.

¹⁹ Bajo la orientación del marco jurídico de la JEP, esto es, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019, las sentencias C-674 de 2017 y C-080 de 2018, y la jurisprudencia del Tribunal para la Paz, por ejemplo, la Sentencia Interpretativa TP-SA-01 de 2019 y la Sentencia TP-SA-RPP-230 de 2021.

²⁰ Óp. cit. Ley 1957 de 2019. Art. 126

²¹ Óp. cit. Ley 1957 de 2019. Art. 141



- **Proceso judicial adversarial**

Dentro de las reglas establecidas en el procedimiento de la JEP, se denomina procedimiento adversarial²², cuando el reconocimiento a la verdad y responsabilidad de los máximos responsables no reconocieron verdad y responsabilidad de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Una vez activado este proceso, la Unidad de Investigación y Acusación (en adelante, UIA) debe presentar su escrito de acusación ante la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (en adelante, SAR), en un término no superior a 60 días, el cual se trasladará a los sujetos procesales e intervinientes para que se pronuncien en el término de 10 días.

Luego, la SAR debe adelantar la audiencia pública preparatoria para posteriormente practicar la audiencia de juzgamiento con presencia de todos los sujetos procesales e intervinientes especiales. Antes de proferirse la sentencia, los comparecientes podrán realizar un reconocimiento pleno y exhaustivo de verdad y responsabilidad que eventualmente los hará receptores de sanciones alternativas, cuya función esencial es retributiva. Por su parte, cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, la SAR impondrá una sanción ordinaria.

En el marco de este proceso a corte de 30 de noviembre de 2023, 5 comparecientes que no realizaron reconocimiento de responsabilidad fueron remitidos al procedimiento adversarial. Este mismo órgano, ha presentado 3 escritos de acusación ante la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

- **Tratamiento especial individual – definición de situación jurídica**

El objetivo del proceso de tratamiento especial individual consiste en definir la situación jurídica y posibles beneficios a comparecientes (excombatientes FARC, agentes del estado, fuerza pública y terceros voluntarios) por solicitud de parte, de manera oficiosa o remisión de otras jurisdicciones o de salas y secciones de la JEP.

La Sala de Amnistía o Indulto (en adelante, SAI), aplica tratamientos jurídicos especiales a los comparecientes condenados o investigados por los delitos amnistiables o indultables. Considerando, entre otros aspectos, las recomendaciones de la Sala de reconocimiento de Verdad y responsabilidad y determinación de los hechos. Le corresponde a la SAI, otorgar libertad transitoria y condicionada a comparecientes de las FARC-EP, y aplicar tratamientos jurídicos especiales a las personas remitidas por la SRVR.

²² Óp. cit. Ley 1957 de 2019. Art. 79 literal q. *Cuando el reconocimiento de verdad y responsabilidad se valore incompleto, requerir a los declarantes para que puedan completarlo, con indicación de las conductas que, en caso de no aportar verdad plena sobre ellas, serían remitidas a la Unidad de Investigación y acusación, para que esta decida si hay mérito para ser remitidas a la Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. El requerimiento a los declarantes deberá indicar los aspectos concretos que habrán de ser completados.*

A corte de 31 de diciembre de 2023 la SAI ha realizado 333 audiencias. En materia de resoluciones de amnistía a excombatientes FARC-EP ha tramitado 4.475²³, en donde se ha concedido a 685 y no ha sido concedida a 3.790 personas. Adicionalmente, ha tramitado la solicitud de 2.516 personas con resolución de libertad condicionada, en donde 468 ha sido concedidas y 2.048 no se han concedido.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) define las situaciones jurídicas de sujetos con participación no determinante en los casos menos graves y representativos en el conflicto armado. De igual forma, le corresponde definir la situación jurídica de las personas de la fuerza pública que hayan cometido conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es la encargada de otorgar los beneficios transitorios, anticipados y condicionados del sistema, y de la imposición y monitoreo del régimen de condicionalidad. Esto para miembros de la fuerza pública, terceros, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y personas involucradas en casos de protesta social.

Como resultado de los avances judiciales a corte de 31 de diciembre de 2023, se destacan los siguientes:

- A 2.881 personas se les ha rechazado su solicitud de sometimiento ante la SDSJ.
- 7 resoluciones de suspensión de proceso en la justicia ordinaria expedidas.
- 106 personas con resolución de revocatoria o restitución de la medida de aseguramiento (10 concede y 96 niega).
- 14 resoluciones de extinción de la acción penal.
- 3.008 comparecientes con resolución de sometimiento proferida (2.348 concedidas y 660 negadas).
- 152 comparecientes con solicitud de suspensión de la orden de captura (103 concede y 49 niega).
- 940 comparecientes con resolución de libertad transitoria condicionada y anticipada (665 concedidas y 275 no concedidas).
- 253 comparecientes con privación de la libertad en unidad militar o policial (231 concede y 22 niega).

3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

3.1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2018 - 2024

La Jurisdicción empezó a apropiar recursos directamente en 2018, inicialmente desde enero de ese año, solo en el rubro de funcionamiento; a partir de octubre de 2018, en el rubro de inversión y, en 2022, apropió recursos de servicio de deuda como aporte del Fondo de contingencias, según disposiciones del Gobierno Nacional. Desde entonces, el 68,29% del recurso público apropiado ha correspondido a presupuesto de funcionamiento, 31,69% restante a presupuesto de inversión y el 0,01% fue servicio de la deuda, únicamente apropiado en 2022 para el fondo de contingencias.

²³ Con amnistía de iure y de Sala

Los rubros con mayor apropiación en la entidad son gastos de personal e inversión. Los gastos de personal corresponden al 77% del gasto histórico de funcionamiento y el 52% del presupuesto total de la Jurisdicción (Ver tabla 2).

Entre 2019 y 2024, el presupuesto apropiado por la JEP ha tenido un crecimiento de 420%, explicado por el paulatino crecimiento de la inversión y el incremento en funcionamiento, que en los dos últimos años es mayor, debido a la planta adicional ya referida en la sección 1 y al aumento en adquisición de bienes y servicios. Tal como se verá en la gráfica 2, la ejecución ha demostrado la necesidad de los recursos apropiados y la capacidad de ejecución de la entidad, que en valores absolutos también ha subido.

Es de anotar que desde 2023 en el componente de funcionamiento se incluyen los recursos para el Comité de seguimiento y Monitoreo (CSM) del Informe final de la CEV.

Tabla 2. Presupuesto apropiado por la JEP (2018 – 2024) – Cifras anuales en millones de pesos corrientes y porcentajes de participación

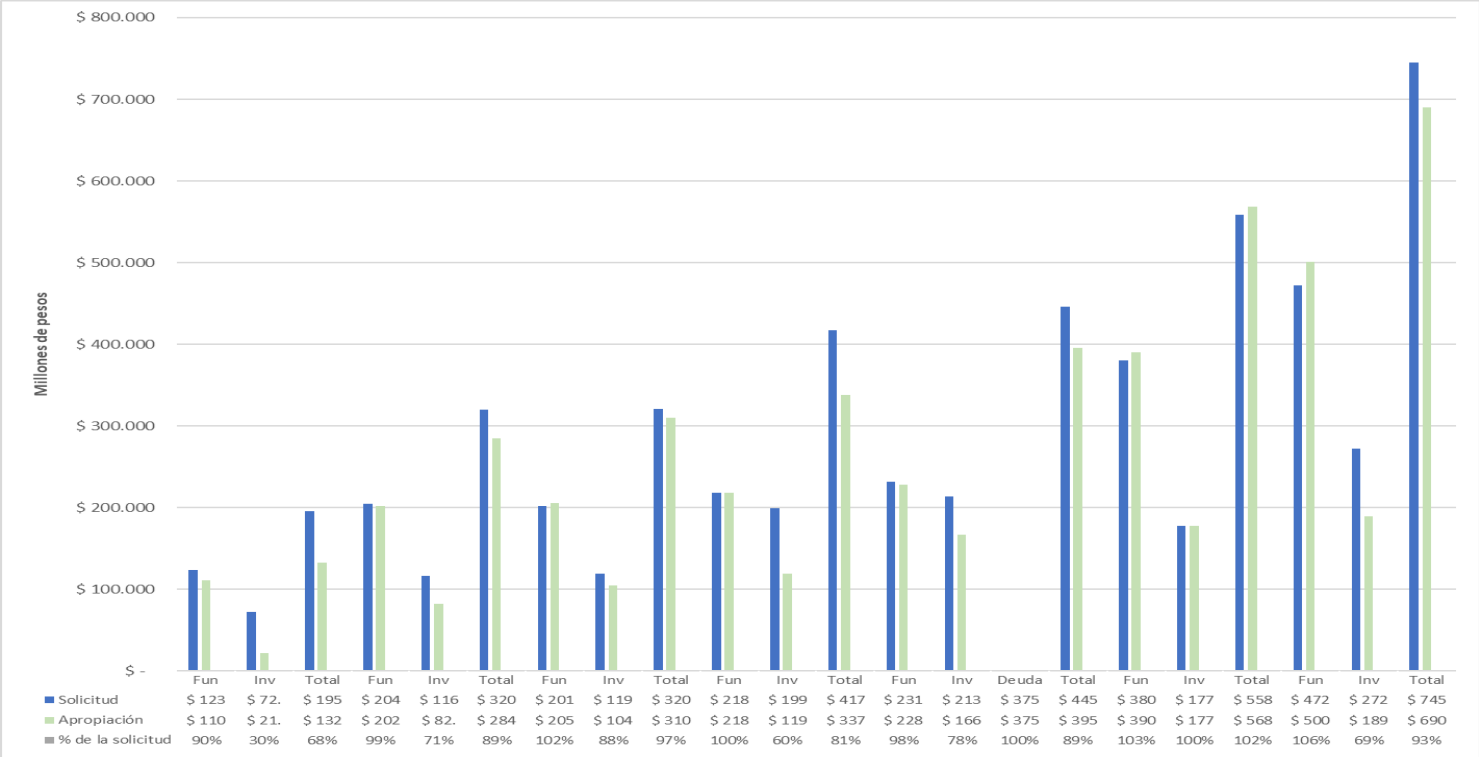
Cuenta	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Acumulado	
	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos	%
Funcionamiento	110.797	84%	202.107	71%	205.893	66%	218.391	65%	228.229	58%	390.545	69%	500.692	73%	1.856.653	68%
Gastos de personal	90.418	82%	171.305	85%	176.705	86%	188.778	86%	198.005	87%	257.524	66%	344.134	69%	1.426.869	77%
Adquisición de bienes y servicios	20.379	18%	29.353	15%	27.642	13%	27.892	13%	28.360	12%	118.527	30%	150.000	30%	402.153	22%
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV – Artículo 32 del Decreto Ley 588 de 2017											1.727	1%	4.655	1%	6.382	0%
Transferencias corrientes			1.046	0,5%	933	0,5%	961	0,4%	988	0,4%	11.647	3,0%	1.000	0,2%	16.574	1%
Cuota de auditaje			403	0,2%	613	0,3%	760	0,3%	876	0,4%	1.119	0,3%	903	0,2%	4.674	0%
Deuda	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	375	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	375	0,0%
Fondo de contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	375	100%	0	0	0	0	375	100%
Inversión	21.884	16%	82.478	29%	104.266	34%	119.157	35%	166.820	42%	177.667	31%	189.400	27%	861.673	32%
Proyectos de inversión	21.884	100%	82.478	100%	104.266	100%	119.157	100%	166.820	100%	177.667	100%	189.400	100%	861.673	100%
TOTAL	132.681		284.585		310.158		337.548		395.424		568.212		690.092		2.718.700	

Fuente: SIIF. Elaboró: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación

De otra parte, conforme la relación entre lo solicitado y lo apropiado que se observa en la siguiente ilustración, en las vigencias 2020, 2021 2023 y 2024 no presentan saldos negativos entre lo solicitado y lo apropiado en funcionamiento; y en funcionamiento e inversión en 2023. La diferencia entre lo solicitado y lo apropiado entre 2018 y 2024 asciende a \$285.090 millones.



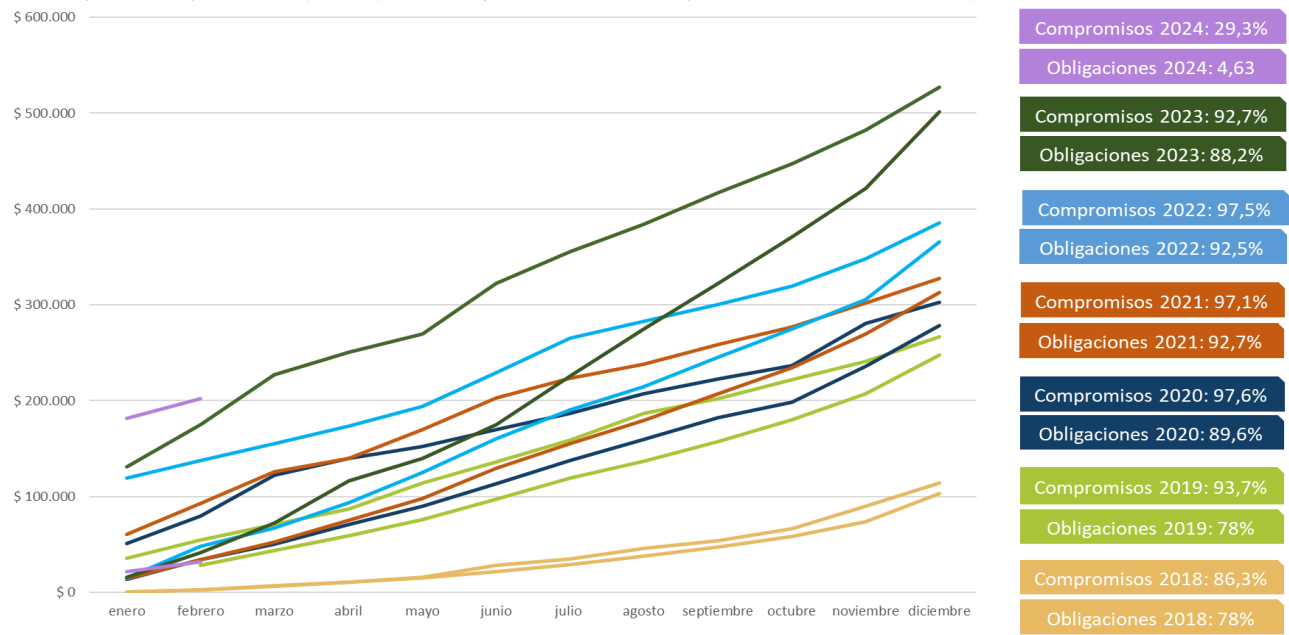
Gráfica 117. Histórico solicitado vs. apropiado (miles de millones de pesos corrientes)



Fuente: SIIF. Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.

A 16 de febrero de 2024, se destaca que los compromisos lograron el 29,3%, en gran medida, por las vigencias futuras aprobadas para la entidad, para garantizar la continuidad de servicios misionales, de protección y tecnológicos, sin afectación especial por el cambio de vigencia. (Ver Gráfica 2) En la siguiente ilustración se aprecia que el monto comprometido y obligado ha ido incrementándose vigencia tras vigencia, con ejecución creciente desde los primeros días de enero, demostrando la buena capacidad de ejecución de la Jurisdicción.

Gráfica 2. Ejecución presupuestal y velocidad de ejecución (millones de pesos corrientes)



Fuente: SIIF. Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.



3.2. NECESIDADES PRESUPUESTALES 2025

En la identificación y costeo de las necesidades de la Jurisdicción para 2025 ha tomado un rol distintivo el impulso procesal tanto de los macrocasos, como de la definición de la situación jurídica de los comparecientes y, con ello, lo que la entidad proyecta concretará en 2025, conforme lo trazado en el Plan estratégico cuatrienal 2023-2026.

Esto implica contemplar los insumos y procesos necesarios para que la JEP cumpla su misión y entregue a los titulares de derechos y la ciudadanía el producto final identificado en la clasificación programática: Servicio de administración de justicia transicional y restaurativa.

Es así como la actividad judicial es neurálgica para lograr el producto final. Además, para que corresponda con lo previsto en el Plan estratégico cuatrienal y con la estricta temporalidad de la JEP, implica que el presupuesto 2024 incluya la apropiación de inversión que permitan el ritmo de diligencias judiciales con el despliegue territorial necesario.

De esta manera, el ejercicio de Anteproyecto ha consultado qué necesidades hay en todos los tipos de recursos que soportan la actividad misional y qué tipo de recursos de especial incidencia en las diligencias y la producción judiciales (Ver ilustración 18) son nuevos a partir de 2025, debido al avance en etapas procesales.

Ilustración 17. Tipo de recursos de especial incidencia en diligencias y producción judiciales



Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.

Considerando esta proyección en la dinámica de la actividad judicial, en total, las necesidades presupuestales de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión propias de la JEP para el 2025 ascienden a \$871.806 millones. El costo de las necesidades reales de la JEP supera tanto el tope de funcionamiento como de inversión en \$231.835 millones (Ver tabla 3).

Los \$871.806 millones requeridos por la Jurisdicción para 2025 incluyen el presupuesto requerido por el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) al informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) por \$5.571 millones.

Tabla 3. Valor total de las necesidades identificadas por la JEP para 2025 – Cifras en pesos corrientes

Cuenta	Apropiación 2024	Solicitud 2025	Variación % (aprop 2024 - solicitud 2025)	Tope	Diferencia / desfinanciación
Total funcionamiento	500.691.768.189	547.376.656.814	9%	531.518.046.868	15.858.609.946
Gastos de personal	344.133.768.189	385.878.090.441	12%		
Adquisición de bienes y servicios*	150.000.000.000	154.024.203.870	3%		
Otras transferencias - incapacidades	1.000.000.000	1.000.000.000	0%		
Cuota de auditaje	903.000.000	903.000.000	0%		
Transferencias corrientes CSM	4.655.000.000	5.571.362.503	20%	No aplica	
Total servicio de la deuda		51.714.571			
Fondo de contingencia	0	51.714.571			
Total inversión	188.808.945.597	324.377.845.016	72%	108.401.584.163	215.976.260.853
Arquitectura	10.522.858.784	25.229.164.692	140%		
Provención	5.824.964.487		-100%		
Investigación	14.325.584.757		-100%		
Gestión estratégica y administrativa	14.098.093.452	17.074.898.913	21%		
Participación Integral **	144.037.444.117	282.073.781.411	96%		
Total	689.500.713.786	871.806.216.402	26%	639.919.631.031	231.834.870.800

*Se incluyó solicitud de Sedes en ABS
** En 2025, el monto del proyecto "Participación integral" incluye las necesidades que en 2024 se están gestionando en los proyectos "Provención" e "Investigación". Es por esto que los dos últimos proyectos no reflejan solicitud para 2025. Entonces, la variación porcentual 2024 - 2025 del conjunto de los tres proyectos es 72%.

Es de anotar que los anteriores valores corresponden al total de las necesidades identificadas por la JEP. En la presentación oficial para el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) se carga el escenario ajustado a tope presupuestal por exigencia técnica, advirtiendo la insuficiencia de estos recursos en el gasto de funcionamiento e inversión en 2025, para que la entidad cumpla con su mandato constitucional y la gestión institucional en materia de resultados conforme el avance procesal de la JEP y el direccionamiento estratégico de la misma.



3.2.1. Presupuesto de funcionamiento 2025

El presupuesto de funcionamiento requerido para 2025 por la JEP asciende a \$547.376.656.814. El tope anunciado por el MHCP para el funcionamiento de la JEP en 2025 corresponde a \$531.518.046.868. Esto implica que el valor total de las necesidades identificadas en funcionamiento para la Jurisdicción en 2024 supera el tope de funcionamiento en \$15.858.609.946.

Así mismo, el valor total de necesidades identificadas en funcionamiento es superior en 9% a la apropiación en funcionamiento de 2024 (Ver tablas 2 y 3). Estas diferencias se explican por dos factores principales:

- i) 12% de mayor requerimiento frente a 2024 en gastos de personal, correspondiente a \$41.744.322.252 millones, dado que hay reclasificación de riesgos laborales desde esta vigencia que se incluyen en el costeo 2025 y que la planta en 2024 está en provisión gradual mientras que en 2025 ya se contempla en toda la anualidad.
- ii) 3% de mayor requerimiento frente a 2024, es decir, \$4.024 millones más que en esta vigencia para adquisición de bienes y servicios.

En las próximas secciones se explican en detalle estos factores y su desagregación en el requerimiento de gasto de funcionamiento que se encuentra realizado la entidad para la vigencia fiscal 2025.

i. Gastos de personal

El valor total de gastos de personal para la JEP en 2025 asciende a \$385.878.090.441 (Ver tabla 3) que corresponden a:

- i) \$382.478.090.441 para la planta vigente en 2024 de 1.455 empleos
- ii) \$3.400.000.000 para la planta que permite cubrir vacantes temporales por situaciones administrativas y/o de contingencias judiciales.

Los gastos del personal de la JEP se calcularon teniendo en cuenta el Decreto 1760 de 2017 que fija el régimen salarial de la Magistratura, el Decreto 2107 de 2017 que fija el régimen salarial del director y los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación y Secretaría Ejecutiva, y el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la JEP establecido en el Decreto 266 de 2018. Además, se tuvieron en cuenta la normatividad propia de la JEP, en el marco de los Acuerdos del OG que tratan asuntos relativos a la planta de personal de la Jurisdicción.

Para realizar el cálculo del valor de los sueldos y demás gastos inherentes a la nómina se tuvo en cuenta el total de 1.455 cargos certificados a 29 de febrero de 2024 con un incremento salarial del 10,88% y de 10,48% de incremento en la bonificación judicial para la estimación de costo 2025 en Anteproyecto. Así mismo, es importante indicar que la Jurisdicción planea que para diciembre 31 de 2023 contará con su planta totalmente provista tanto en los cargos certificados a 28 de febrero, como con los vacantes que

incluyen los 148 empleos de la planta adicional que se estarán proveyendo entre mayo y octubre de la vigencia en curso.

ii. Gasto de adquisición de bienes y servicios (ABS)

De acuerdo con las proyecciones realizadas para la vigencia 2025 se requerirá un presupuesto de \$ 154.024.203.870 para cubrir todos los gastos recurrentes, lo que representa un incremento del 3% con relación al presupuesto de \$150 mil millones de la vigencia 2024, el cual incluye \$140 mil millones en el mismo rubro y \$10 mil millones en transferencias corrientes.

Es importante resaltar que para la JEP ha sido importante incluir en ABS los gastos recurrentes y que comportan la tipología de funcionamiento, depurando la inversión, lo cual se ha venido logrando con apoyo de las autoridades presupuestales en los dos últimos años. Además de ello, para 2025 se incluyen los siguientes gastos:

1. \$642.646.718 millones que hasta 2024 correspondieron al proyecto de inversión “Sedes”, el cual culmina su horizonte de ejecución y ya no tendrá componentes de inversión para dar lugar a la formulación de un nuevo proyecto.
2. La entrada en operación de la sede alterna de la JEP demanda asignar recursos para gastos recurrentes como son arriendo, vigilancia, seguridad externa de la instalación, aseo, servicios públicos entre otros. Estos gastos adicionales equivalen a \$ 5.814 millones de pesos.
3. La planta adicional representa un impacto directo en varios de los servicios que se financian por este rubro, lo que obliga a la JEP a proyectar su impacto Presupuestal en \$500 millones, ya incluido en la solicitud, por concepto de aseo y cafetería, servicios públicos, papelería, impresión y copiado y actividades de bienestar.
4. La proyección del presupuesto de servicios cuya proyección no se da por supuesto macroeconómico para IPC toda vez que responden o son sensibles a otras variables que se explican a continuación y que corresponden a \$8.057.353.072:
 - Analítica, con un incremento adicional \$1.085.531.331 que implica la renovación de soporte estándar, servicios de científico de datos y especialista funcional.
 - Arriendo sede alterna: que frente a 2024, implica costo de todo el año y en la sede base el incremento se da IPC vencido, esto es, 9,28%. Tiene un incremento de \$692.574.498 y ya cuenta con vigencias futuras autorizadas.
 - Digitalización, con aumento de \$475.958.646 y vigencias futuras autorizadas.
 - Interoperabilidad, con incremento de \$3.269.390.907 con sustitución de fuente de financiamiento.

- Protección a operadores de justicia de la JEP, con incremento de \$1.638.208.841 dadas las nuevas tarifas establecidas por la UNP y 1 esquema adicional de protección. Cuenta con vigencias futuras autorizadas.
- Protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, por la misma razón de tarifas de la UNP. También cuenta con autorización de vigencias futuras.

La relación de necesidades en ABS se presenta a continuación. Además, en el anexo 1 se presentan detalles de la base de costeo para 2025.

Tabla 4. Necesidades identificadas de adquisición de bienes y servicios para la JEP en 2025 - Cifras en pesos corrientes

Concepto	Presupuesto 2024*	Necesidad 2025	Variación %
Actualización instrumentos archivísticos	350.864.784	0	-100%
Almacenamiento y custodia de archivos	350.000.000	389.290.659	11%
Analítica	1.225.733.109	2.311.264.440	89%
Área protegida	67.142.609	44.252.628	-34%
ARL contratistas	750.000.000	750.000.000	0%
Arriendo sede (Cuenta con VF)	20.856.766.700	22.800.747.200	9%
Arriendo sede alterna	1.856.400.000	3.467.432.607	87%
Aseo y cafetería	1.597.844.598	2.752.626.213	72%
Bienestar (Compensar)	1.000.000.000	1.200.000.000	20%
Caja menor	31.020.000	31.020.000	0%
Contratistas	2.514.430.034	2.716.661.115	8%
CONTi	2.474.266.891	319.262.744	-87%
Datacenter (Cuenta con VF)	9.649.974.791	9.943.277.591	3%
Digitalización (Cuenta con VF)	1.577.124.043	2.053.082.689	30%
Elementos bioseguridad	132.368.081	140.310.166	6%
Elementos carnetizadora	47.008.000	48.508.000	3%
Diagnóstico y certificación RETIE	6.000.000	0	-100%
Ferretería	180.000.000	180.000.000	0%
Firma digital (Cuenta con VF)	271.008.355	276.428.522	2%
Imprenta (Cuenta con VF)	30.000.000	30.000.000	0%
Impresión y copiado (Cuenta con VF)	1.225.200.000	1.320.000.000	8%
Interoperabilidad	781.166.551	4.050.557.458	419%
Mantenimientos	410.818.342	234.177.390	-43%
MEDiA	255.021.626	262.672.275	3%
Mensajería (Cuenta con VF)	134.765.256	187.605.924	39%
Mesa ayuda (Cuenta con VF)	2.077.854.562	2.140.190.199	3%
Mobiliario	0	118.076.873	
LEGALI	8.455.417.602	8.455.417.602	0%
Papelería	0	31.890.820	
PIGA	17.400.000	18.444.000	6%
PLANi	302.760.990	174.882.400	-42%
Policía Nacional	614.835.000	1.074.495.600	75%
Portal traslado de archivos	0	120.000.000	



Concepto	Presupuesto 2024*	Necesidad 2025	Variación %
Protecti	0	153.491.508	
Sedes (gasto que viene de inversión)	0	642.646.718	
Sede UIA	3.263.418.577	0	100%
Seguridad y vigilancia	2.188.725.383	3.313.728.383	51%
Seguro drones	52.550.000	55.703.000	6%
Seguro sala infantil	5.000.000	5.300.000	6%
Seguro todo riesgo	2.023.600.000	2.145.016.000	6%
Seguros vida	262.750.000	278.515.000	6%
Servicios públicos	771.815.968	1.227.187.389	59%
Evaluaciones médicas pre y post ocupacionales	126.120.000	101.400.480	-20%
Sistema nómina - almacén	295.854.663	313.605.941	6%
Tiquetes	3.006.824.037	3.187.233.479	6%
UNP-SE-UIA	61.708.942.219	67.466.094.980	9%
Ventanilla Única	2.608.036.856	2.608.036.856	0%
Viáticos	3.144.856.718	3.436.699.421	9%
ViSTA	1.373.898.295	1.446.969.600	5%
TOTAL	140.075.584.640	154.024.203.870	9%

Fuente: SEJEP – Subdirección Financiera. Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.

iii. Gasto de transferencias corrientes para el Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad

En atención a la creación y puesta en operación del CSM, conforme lo dicta el artículo 32 del Decreto ley 588 de 2017, a la JEP le corresponde relacionar y administrar el presupuesto que requiere el CSM para su operación. De acuerdo con lo remitido por la CSM a la JEP, sus necesidades presupuestales para 2025 ascienden a \$5.571.362.503, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla y cuya justificación está en el Anexo 2, elaborado por el CSM.

Tabla 51. Presupuesto estimado para el funcionamiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo en 2025 – Cifras en pesos corrientes

Marco Estratégico /Objetivos	ítem	Unidad/subítem	Valor unitario	Cantidad requerida	Valor Total	Funcionamiento -adquisición de Bs y Ss.-
1. Direccionar la labor misional del Comité de Seguimiento y Monitoreo.	Sesiones del CSM	1	5.480.595	36	197.301.420	2.858.119.734
	Coordinador/a ST	1	26.837.531	11	295.212.841	
	Coordinador Académico	1	19.463.047	11	214.093.517	
	Asesores Senior	6	105.510.201	11	1.160.612.211	
	Asesores Junior	7	68.120.657	11	749.327.227	
	Comunicador	1	6.083.393	11	66.917.323	
	Profesional Administrativo	1	9.731.522	11	107.046.742	



Marco Estratégico /Objetivos	ítem	Unidad/subítem	Valor unitario	Cantidad requerida	Valor Total	Funcionamiento -adquisición de Bs y Ss.-
	Profesional Administrativo	1	6.146.223	11	67.608.453	
2.Definir, construir e implementar y revisar de manera periódica la metodología de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV que permitan la elaboración de informes y otros productos derivados	1. Recolección de información del Barómetro; 2. Análisis de información del Barómetro; 3. Incorporación de los resultados en los informes de seguimiento y monitoreo respectivos,	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1.067.608.453
	1. Actualización, ajustes y mantenimiento del Sistema	1	6.146.223	11	67.608.453	
3. Difundir de manera amplia las recomendaciones e informes de seguimiento y monitoreo a la sociedad colombiana, incluida la diáspora.	Valor Global	1	365.898.953	1	365.898.953	365.898.953
4. Construir e implementar una política de incidencia que promueva espacio de interlocución con las instituciones responsables de la implementación de las recomendaciones	Asesor en Incidencia	1	17.585.033	11	193.435.363	193.435.363

Marco Estratégico /Objetivos	ítem	Unidad/subítem	Valor unitario	Cantidad requerida	Valor Total	Funcionamiento -adquisición de Bs y Ss.-
5. Promover una metodología dialógica que permita establecer canales de interacción en los territorios y grupos poblaciones para difundir y retroalimentar los informes de seguimiento y monitoreo	Espacios de dialogo e incidencia y laboratorios de ideas a nivel territorial, nacional e internacional con los responsables y destinatarios de las recomendaciones (Foros, seminarios, talleres, mesas, congresos, etc.)	1	25.000.000	7	175.000.000	1.009.900.000
	Mesas técnicas y Diálogos de saberes territoriales con la sociedad civil	1	10.000.000	7	70.000.000	
	Mesas Técnica para la Recolección de información para los informes de seguimiento y monitoreo	1	5.000.000	10	50.000.000	
	Gasto de desplazamiento ST	1	800.000	46	36.800.000	
	Gasto de desplazamiento miembros CSM	1	800.000	20	16.000.000	
	Gastos de Viaje miembros CSM	1	350.000	20	7.000.000	
	Gastos de Viaje ST	1	350.000	46	16.100.000	
	Tiquetes Miembros CSM	1	9.000.000	20	180.000.000	
	Tiquetes ST	1	9.000.000	46	414.000.000	
	Tiquetes Internacionales	1	7.500.000	6	45.000.000	
6. Operación de la Secretaría Técnica	Licenciamiento de software	1	5.200.000	12	62.400.000	76.400.000
	Suministros de oficina	1	1.000.000	11	11.000.000	

Marco Estratégico /Objetivos	ítem	Unidad/subítem	Valor unitario	Cantidad requerida	Valor Total	Funcionamiento -adquisición de Bs y Ss.-
	Licenciamiento y registro de dominio para el equipo técnico (24 profesionales)	1	3.000.000	1	3.000.000	
Valor Presupuesto 2025					5.571.362.503	5.571.362.503

Elaboró: Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones (2024).

3.2.2 Presupuesto servicio de la deuda 2025

Para la vigencia 2025, se incluye en el rubro servicio de la deuda el valor de \$ 51.714.571 correspondiente al Fondo de Contingencias, para posibles demandas que se presenten en el 2025, de conformidad con el Artículo 2.4.4.6 del Decreto 1068 de 2015²⁴. Este monto corresponde al formulario de cálculo del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por Sentencias y Conciliaciones y que surtirá la formalización por parte de MinHacienda.

3.2.3 Presupuesto de inversión 2025

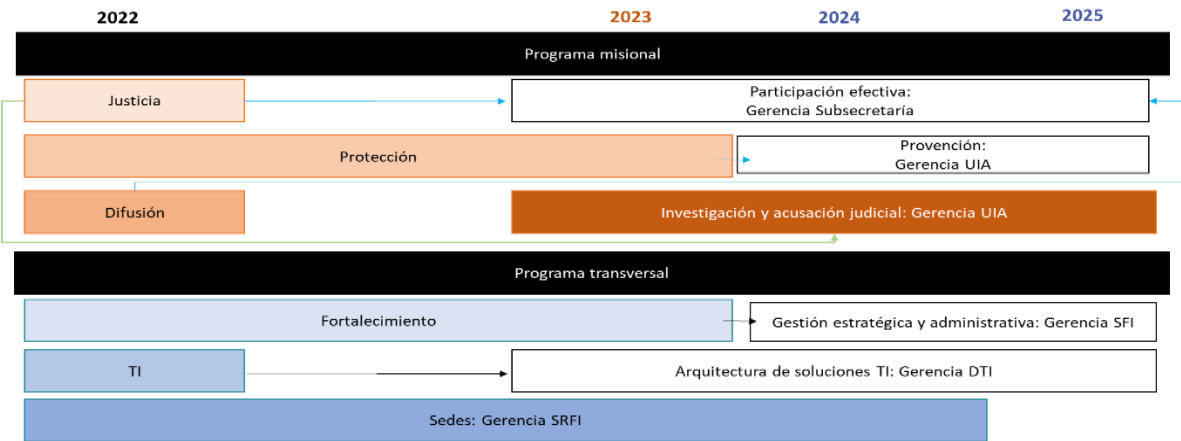
En 2022, la Jurisdicción inició la reformulación de su portafolio de inversión con la finalización de 3 proyectos de inversión (2 en el programa misional y uno en el programa transversal) y su correspondiente registro de 3 nuevos proyectos de inversión que iniciaron ejecución a finales de 2022 para el apalancamiento de vigencias futuras y continúan en ejecución hasta 2026. Adicionalmente, en 2023 se formularon dos (2) proyectos de inversión nuevos, que iniciaron ejecución en la actual vigencia. (Ver ilustración 18).

Así la cosas, en 2024, la JEP cuenta con seis (6) proyectos de inversión. Tres (3) en el programa misional denominados “Participación integral”, “Investigación y acusación judicial” y “Provención”. Tres (3) más en el programa transversal, que se denominan: “Arquitectura de TI”, “Gestión estratégica y administrativa” y “Sedes”. Este último finaliza la ejecución en esta vigencia, pues el gasto que ampara ya corresponderá a funcionamiento y se ha proyectado en adquisición de bienes y servicios. En 2025, el monto del proyecto “Participación integral” incluye las necesidades que en 2024 se están gestionando en los proyectos “Provención” e “Investigación”. Es por esto por lo que los dos últimos proyectos no reflejan solicitud para 2025. Entonces, la variación porcentual 2024-2025 del conjunto de los tres proyectos es 72%

²⁴ “Apropiaciones Presupuestales de los Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Las Entidades Estatales de que trata el artículo 2.4.4.2 de este Título, deberán apropiar en su presupuesto anual, en el rubro de Servicio de la Deuda, las partidas necesarias para dar cumplimiento al Plan de Aportes aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”



Ilustración 18.18 Actualización del portafolio de inversión pública de la JEP



Elaboró: Secretaría Ejecutiva, SEJEP – Subdirección de Planeación (2023)

Para este portafolio de inversión pública consolidado de la Jurisdicción, se ha identificado que se requiere un presupuesto para 2025 por valor de \$324.377.345.016. El tope anunciado por el MHCP para la inversión de la JEP en 2024 corresponde a \$108.401.584.163. Esto implica que el valor total de las necesidades identificadas en inversión para la Jurisdicción en 2025 supera el tope de inversión en \$215.976.260.853.

Así mismo, el valor total de necesidades identificadas en inversión es superior en 72% a la apropiación vigente en inversión de 2024, que corresponden a \$135.569 millones (Ver tabla 6).

En la comprensión de estos datos se debe considerar que, en todo caso, el tope en inversión para 2025 parte de una reducción del 42,77% frente a la apropiación de la Jurisdicción en inversión en 2024. Este panorama no se compadece con la creciente producción judicial de la JEP y la dependencia de la inversión para la actividad judicial y de acceso a la justicia correlativa. Más aún, conscientes de la estricta temporalidad y la planeación estratégica realizada por la JEP, es fundamental que la inversión no se reduzca y, al contrario, esté a la par del avance misional, pues de lo contrario se ralentizaría la ruta judicial con graves efectos para la sociedad colombiana.

En la tabla 6, se presenta el panorama de inversión desglosado por proyecto. Por supuesto, todo el detalle técnico será objeto de la actualización de proyectos de inversión con miras a la conformación del Plan operativo anual de inversión (POAI) para 2025, con las precisiones a que haya lugar, dentro de las que se encuentran las focalizaciones por política transversal construcción de paz, equidad de género, grupos étnicos y actividades TIC. Así mismo, preparará la propuesta de mediano plazo (PMP) para los comités funcionales y sectorial de Marco de gasto de mediano plazo (MGMP).

Tabla 6. Valor total de las necesidades identificadas en inversión para la JEP en 2025 – Cifras en pesos corrientes

Denominación proyecto	Asignación 2024	Valor necesidades de inversión - 2025	Diferencia porcentual
Arquitectura	\$10.522.858.784	\$25.229.164.692	140%
Provención	\$5.824.964.487		-100%
Investigación	\$14.325.584.757		-100%
Gestión para la administración de justicia	\$14.098.093.452	\$17.074.898.913	21%
Participación Integral	\$144.037.444.117	\$282.073.781.411	96%
Total inversión	\$188.808.945.597	\$324.377.845.016	72%

Elaboró: SEJEP – Subdirección de Planeación.
* En 2025, el monto del proyecto "Participación integral" incluye las necesidades que en 2024 se están gestionando en los proyectos "Provención" e "Investigación". Es por esto que los dos últimos proyectos no reflejan solicitud para 2025. Entonces, la variación porcentual 2024 - 2025 del conjunto de los tres proyectos es 72%.

3.2.4. Ajuste al tope presupuestal 2025

Es importante resaltar que con apoyo del Ministerio de Hacienda y el DNP, la inversión de la entidad ha venido reorganizando la ubicación de los gastos de acuerdo con su naturaleza y el avance de la entidad de manera que algunos ya se encuentran en funcionamiento.

Tal es el caso del soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos, cuyo soporte presupuestal ha empezado a migrar en 2023 hacia adquisición de bienes y servicios y, para 2024 se logró incluir otros gastos. Aún es necesario continuar en esta senda en 2025. También ocurre con los servicios de protección que presta la UNP, que desde 2023 se financian completamente por funcionamiento; de manera que en la proyección para 2025 se mantiene este comportamiento.

Esta reconfiguración en el presupuesto de la Jurisdicción, iniciada desde 2023, se refleja en la proyección presupuestal para 2025, pues se mantiene el ciclo de maduración de la entidad lo que hace que finalice el ciclo de inversión de algunos gastos. Así mismo, el avance procesal de la Jurisdicción, dentro del marco temporal fijado para la entidad, implica mayores requerimientos de recursos presupuestales para no reducir el ritmo de la actividad judicial que se requiere en el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la JEP.



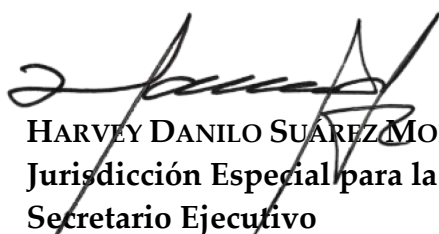
Con la anterior precisión, es importante anotar que la Jurisdicción ha realizado el registro y la oficialización del anteproyecto 2024 en el SIIF con valores que no superan el tope determinado por el MHCP de \$639.920 millones (Ver tabla 3).

Por lo tanto, se encuentran desfinanciados \$231.835 millones, desagregados así:

- \$15.859 millones de funcionamiento
- \$215.976 millones de inversión

Es importante reiterar que el hecho de que todas las necesidades presupuestales de la JEP no se puedan oficializar en el registro en el SIIF, no implica que vayan a ser desconocidas o no consideradas por el MHCP, pues para ello también se debe enviar vía correo electrónicos las necesidades reales de la entidad con su debida justificación, para lo cual es fundamental este documento justificativo.

En los anteriores términos, se presenta el anteproyecto de presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz para la vigencia fiscal 2025.



HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES
Jurisdicción Especial para la Paz
Secretario Ejecutivo

Elaboró: LUZ PIEDAD HERRERA R. – DANIEL FELIPE TOBÓN D. – ADRIANA PÉREZ M. – KAREN CALDERÓN C.
Revisó: DIEGO LUIS OJEDA L. – ANDREY SÁNCHEZ S.
Aprobó: ADELA PARRA G.